Informe académico final de investigación

Información general de proyecto

Código Interno	17180040	Supervisor/ Director Centro de Investigación	Norhy Torregrosa Jiménez
Nombre del proyecto de investigación	La contratación en el marco de la CAN	Fecha de inicio del proyecto.	31 de marzo de 2017
Nombre del Investigador principal	Carolina Blanco Alvarado	Fecha de finalización del proyecto.	31 de diciembre de 2017
Nombre de los co-investigadores		Fecha de presentación del informe de avance.	4 de octubre de 2017
Nombre de los auxiliares de investigación /estudiantes de semillero vinculados		Fecha de presentación del informe de cierre	31 de octubre de 2017
Grupo de Investigación/Semillero	Derecho Público Francisco de Vitoria	Centro de costos asignado	
Nombre de la línea activa de investigación	Derecho Administrativo	Facultad y programa	Derecho

Contenido

El informe final es un documento académico en el cual debe plasmarse el proceso de investigación y los resultados obtenidos con base en los objetivos, la problematización, la apuesta teórica y la metodología planteada. Entre otros, para la elaboración del informe se debe tener en cuenta los siguientes aspectos orientadores:

✓ **Título final**

La contratación en el marco de la CAN

✓ **Resumen (indicando los resultados obtenidos)**

El fenómeno de la globalización ha generado un cambio de organización política y jurídica en la figura del Estado Nación sin que dicha modificación presente elementos institucionales que garanticen una transición pacífica, equilibrada, legítima y justa. Es en el citado contexto en el que se considera necesario fortalecer el proceso andino de integración.

La integración propiamente dicha es un status jurídico en el cual los Estados entregan el ejercicio de algunas de sus prerrogativas soberanas, con el fin de constituir un área dentro de la cual circulen libremente y reciban el mismo trato, las personas, los bienes, los servicios y los capitales, mediante la armonización de las políticas correspondientes y bajo una perspectiva supranacional (Caballero y Anzola, 1995, p.81). Dicha integración supone un proceso voluntario de institucionalización de los mecanismos que formulen interpreten y apliquen el derecho.

En aras de promover, fortalecer y aprovechar las bondades del proceso andino de integración, resulta de interés analizar la viabilidad de propuestas de armonización legislativa en la Comunidad Andina.

La realización de proyectos de integración reclama la estructuración y puesta en funcionamiento de una organización administrativa y técnica, y determina la creación de autoridades comunitarias, con específicas competencias, y del mismo modo, la formulación de un sistema normativo con el vigor y la eficacia requeridos para que aquéllas puedan regular directamente las cuestiones atinentes en materia de integración, sin tener que recurrir a los procedimientos ordinarios del derecho interno de cada país (Tremps, 1994, p.39). En el citado contexto fue creado el Parlamento Andino como el órgano comunitario deliberante de la Comunidad Andina, de conformidad con las atribuciones asignadas por el artículo 43 del Acuerdo de Cartagena, y cuya función principal es la promoción y orientación del proceso andino de integración, sugiriendo acciones y normas de interés común que tengan por objeto el fortalecimiento y efectividad del sistema de integración comunitaria.

Atendiendo a que el artículo 43 del Acuerdo de Cartagena prevé que es competencia del Parlamento Andino, la armonización legislativa en el marco de la Comunidad Andina, con el trabajo de investigación se pretende analizar los fundamentos por los cuales en la actualidad no existen propuestas de armonización legislativa en temas propios de la contratación estatal y como consecuencia de ello, de ser procedente, intentar formular los temas que podrían ser objeto de una propuesta de armonización legislativa al interior de los países miembros.

Los principales beneficiarios de la investigación serían la Comunidad Andina y obviamente, el Parlamento Andino, a quien se le presentaría una vez finalizado el proyecto de investigación, el respectivo informe final, en aras de que éste, de conformidad con su reglamento general, pueda presentar el resultado de la investigación a la Plenaria y a los Órganos del Sistema Andino de Integración (SAI) con la finalidad de lograr su difusión al interior de los Estados andinos.

✓ **Palabras clave**

Integración andina, contratos estatales, armonización legislativa

✓ **Marco teórico y estado del arte elaborado.**

ESTADO DEL ARTE

“Las profundas transformaciones producidas en el mundo por la aparición de complejos y serios problemas globales” (Carrillo, 1985. p.13) ha decidido a los países interrelacionarse mediante alianzas tipificadas como integraciones para afrontar tan difícil panorama (Dreyzin, 2007). La realidad mundial presenta la aparición de nuevos escenarios y espacios de relaciones que ya no pueden ser solucionados por las funciones clásicas del Estado-nación (Perotti, 2010); lo que ha conllevado a que el concepto de Estado se haya convertido en algo demasiado complejo (Castells, 1998). Es en el referenciado contexto en el que parte de la Doctrina ha considerado procedente la reestructuración de la noción de Estado (Estrada, 2006) o de las funciones del mismo, labor en la que, en modo alguno, los procesos de integración deben adquirir importancia. Dentro de los citados procesos de integración se encuentra la Comunidad Andina, la cual ha de entenderse como una Comunidad de Derecho que exige por parte de todos los Estados miembros el sometimiento a un

mismo Derecho en aquellas materias en las que se ha realizado la transferencia del ejercicio de competencias en favor de la Comunidad (Alcoceba, 2008) y como una organización internacional cuya naturaleza jurídica es secundaria y funcional, por cuanto su subjetividad jurídico-internacional depende de la voluntad de los Estados y porque sus funciones o competencias se restringen a las que explícita o implícitamente les atribuyan los Estados miembros en el derecho primario u originario

Hace aproximadamente cuarenta años los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, después de concluidas las acciones y procedimientos establecidos para llevar adelante las iniciativas e instrucciones Presidenciales y la preparación del documento constitutivo de su agrupación, acordaron aprobar y suscribir el denominado “Acuerdo de Integración Subregional”. Este documento internacional, de naturaleza comunitaria, ha sido considerado como el cimiento de la “construcción integracionista” de los países andinos, la cual, no obstante los diversos problemas ocurridos durante estas cuatro décadas, sigue siendo un proyecto común con renovada planificación y desarrollo que puede seguir adelante si se adopta una visión finalmente integradora.

“América es sin duda la Región del mundo donde la idea de integración, entendida como proceso tendiente a suprimir fronteras nacionales, ha estado presente en el discurso político desde hace más tiempo” (Cauffignal, 1996, p.11); de hecho, la idea de integración latinoamericana resulta ser notablemente anterior a la europea, haciéndose sentir en las primeras décadas del siglo XVIII. La integración es un viejo sueño latinoamericano, *“como lo atestiguan el pensamiento y la acción de los precursores y luchadores de la Independencia, así como la persistencia del tema a lo largo de la historia republicana”*. (Secretaría General de la CAN, 2006, p. 7). De acuerdo con las condiciones actuales, pensar en la conformación y articulación de un espacio de integración política y económica, no debería extrañar a nadie. Lo que quizás sea cuestionable es porque hemos tardado tanto en impulsar este tipo de iniciativas (Díaz & Romero, 2008). Para el efecto, se considera que en los países andinos existe un amplio consenso en cuanto a que la integración regional puede ayudar al ajuste del nuevo orden mundial. Sin embargo, la coincidencia es mucho menor en cuanto a *“la forma de conseguirlo y las reformas necesarias para llevarlo a cabo”* (Guerra, 2002, p.11).

La actual Comunidad Andina sienta sus raíces en añejos procesos de acercamiento de los países andinos. El Acuerdo de Cartagena de 1969 fue el Tratado de Derecho Internacional que dio origen la Organización de Integración Internacional que en el texto original se denominó Pacto Andino. Posteriormente, a través del Protocolo de Trujillo del 10 de marzo de 1996 y que entró en vigencia el 3 de junio de 1997, se dará nacimiento a una nueva estructura orgánica y funcional para la Integración Andina conformada por la Comunidad Andina – CAN y el Sistema Andino de Integración-SAI. Esta norma básica y originaria, y sus protocolos e instrumentos adicionales, consisten en el Instrumento jurídico internacional que origina un cuerpo sistémico y autónomo de normas supranacionales que los Países miembros crean para la fundación de un área de integración social, cultural y económica que abarca el conjunto de sus naciones.

Expresamente, el artículo 1° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dispone cuales son los componentes del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina así:

- ❖ El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales;
- ❖ Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y sus Protocolos Modificatorios;
- ❖ Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina;
- ❖ Las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y,

❖ Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina.

La integración como proceso voluntario implica la institucionalización de los mecanismos que formulen interpreten y apliquen el derecho. Entonces tenemos que el derecho de la integración es dictado por instituciones comunitarias, aplicado coercitivamente por órganos estatales puestos al servicio del interés comunitario e interpretado por un órgano comunitario autónomo. Luego la función del derecho en un proceso de integración es avalar el cumplimiento de la voluntad común de los Estados, y actuar como factor de orden y seguridad para los Estados miembros en cuanto a una distribución equitativa y justa de los beneficios y cargas derivados del proceso, pues de lo contrario predominarían los intereses de los Estados más fuertes, lo cual causaría el deterioro de los términos del espíritu del proceso.

La originalidad del Derecho de la Integración se encuentra en la introducción de un sistema que supera el tradicional de representación única de los Estados y su mecanismo de funcionamiento en las relaciones internacionales, mediante la creación de un aparato institucional que aunque mantiene elementos intergubernamentales típicos de los aparatos institucionales de las estructuras internacionales de cooperación, introduce elementos de autonomía que le distancian de la voluntad de los Estados participantes en el sistema y que se impone jurídicamente a ellos (Alcoceba, 2008).

En este orden de ideas, el Derecho en un proceso de integración constituye:

1. Un factor de equilibrio, entre Estados de diferente dimensión y capacidad económica;
2. Un elemento de legitimación de las decisiones de los órganos de integración, al contribuir a formar el consenso sobre dichas decisiones;
3. Un elemento de planeación, por cuanto se hace necesario conciliar múltiples intereses nacionales y regionales que pueden resultar contradictorios.

El Parlamento Andino y su Función de Armonizar legislativamente

En los procesos de integración existen instancias que tienen por principio constitutivo la representación ciudadana, como es el caso de los Parlamentos; en ellos se concentra el principio de delegación (representación) de la voluntad popular de cara a la elaboración de políticas comunes a todos los Estados que ceden el ejercicio de parte de la soberanía frente a un esquema de integración. Para efectos del proceso andino de integración existe el Parlamento Andino, Organización internacional conformada por parlamentarios designados por elección popular por Colombia, Ecuador y Perú; sin que Bolivia presente a la fecha elección popular de parlamentarios, y como consecuencia de ello, sean 5 congresistas bolivianos, quienes desempeñen las funciones de Parlamentarios Andinos por éste país.

Al verificar el contenido de las Decisiones y Resoluciones de la Comunidad Andina emitidas en los últimos dos (2) años, se pudo constatar que estas evidencian la intención de efectuar armonizaciones legislativas. En otras palabras, el contenido de varias de las mencionadas Decisiones y Resoluciones ha debido enmarcarse en propuestas de armonización legislativa, proyectadas y presentadas por el Parlamento Andino a la Comunidad Andina (CAN); actividad que en realidad no se cumplió, ya que el contenido de dichas Decisiones se limitó a efectuar exhortaciones a los países miembros, para que de manera independiente e individual configuren las políticas necesarias en el tema en particular (Blanco, 2011).

De conformidad con los artículos 42 y 43 del Acuerdo de Cartagena, el Parlamento Andino debe participar en la generación normativa del proceso andino de integración, sugiriendo a los órganos del sistema, proyectos y normas de interés común y promoviendo la armonización de las legislaciones de los países miembros. En concordancia con la referenciada normatividad, el artículo 5° del Reglamento General del Parlamento Andino, tipifica dos clases de Funciones del Parlamento Andino, las cuales son previstas como poderes de dicho Organismo Internacional, y que a continuación se proceden a enunciar:

“a) Poder constituyente: sugerir las acciones o las decisiones necesarias para modificaciones, ajustes o nuevos lineamientos en relación con los objetivos programáticos y la estructura institucional del Sistema Andino de Integración

b) Función Legislativa: Participar mediante sugerencias en la generación normativa del proceso andino de integración sobre temas de interés común para su incorporación en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como promover la armonización de las legislaciones en los países miembros”.

El tribunal Andino declaró en el proceso 1-AN-97, que *“el Tratado de Cartagena es un tratado marco en el que sus normas positivas no pueden abarcar todo el complejo panorama y desarrollo progresivo que experimenta un proceso de integración”*. Lo anterior obedece a que la norma fundacional o primaria del Ordenamiento Jurídico Andino, es incompleta porque, no obstante indicar los destinatarios, no suele desarrollar y precisar la conducta o la abstención que estos deben observar. El carácter incompleto de esta norma exige que, para efectos de su cumplida ejecución, sea desarrollada o complementada (Insignares, 2007). Es en el citado contexto en el que órganos comunitarios como el Parlamento Andino, cobran toda su importancia en el proceso de integración andina; el cual desde el artículo 42 del Acuerdo de Cartagena se tipifica como el órgano deliberante del Sistema con naturaleza comunitaria, y teóricamente, con potestad normativa en los asuntos que son de su competencia.

Académicamente y teóricamente, al ser tipificado el Parlamento Andino como órgano comunitario, dicha circunstancia le permite, en principio, expedir actos jurídicos vinculantes para los Estados miembros de la Comunidad Andina, los cuales se enmarcarían en el contexto del derecho derivado del Ordenamiento Jurídico Andino; esto es en el fruto del ejercicio de poderes normativos por parte de los órganos comunitarios.

Algunos Aspectos sobre armonización Legislativa

La incidencia del Derecho Comunitario sobre los ordenamientos nacionales puede manifestarse de forma distinta en la medida en que responda al cumplimiento de una función coordinadora, de una función armonizadora o de una función unificadora. En otras palabras, la adaptación del Derecho Interno al Derecho Comunitario puede tener lugar a través de tres mecanismos: Coordinación, armonización y unificación normativa.

En este sentido, y en primer lugar, el Derecho Comunitario puede desempeñar una labor de coordinación del Derecho Interno en determinadas materias conexas a la integración. En este caso el Derecho Interno no se ve alterado por el Derecho Comunitario, ni modificado, ni sustituido, sino coordinado para evitar posibles distorsiones derivadas de la aplicación de la normativa nacional a situaciones de alcance comunitario.

En segundo lugar el Derecho Comunitario puede generar un efecto armonizador de las legislaciones nacionales en aquellas materias amparadas por el sistema de la integración. *“En este caso el Derecho Nacional continúa existiendo pero debe modificarse en función de las exigencias impuestas por el derecho comunitario, de manera que los diversos sistemas jurídicos nacionales presenten entre ellos un cierto grado de homogeneidad determinada por unas finalidades comunes”* (Sobrino, 1996, p.p. 18-19).

En tercer lugar, la unificación normativa se refiere a aquellos supuestos en los que el Derecho Comunitario sustituye a las legislaciones internas. Este es el nivel en el que el Derecho Comunitario incide con mayor intensidad en los ordenamientos internos, como quiera que modifica sustancialmente el ordenamiento jurídico de los países miembros.

La Armonización Legislativa como mecanismo que permite el mejoramiento de la técnica legislativa:

Es evidente las dificultades de los procesos de creación y aplicación del Derecho; y la inadecuación de técnicas jurídico-administrativas tradicionales en orden a la eficaz satisfacción de los intereses generales. Por lo que concierne a los procesos de creación y aplicación del Derecho, el signo más llamativo de la crisis es la puesta en cuestión del mito útil de la Ley como expresión de la voluntad general. Se trata de un mito que se ha revelado falso, pues la Ley, de suyo, no representa la voluntad general (Núñez, 2009). No debemos obviar la constante erosión del imperio de la ley que está produciendo el fenómeno de la globalización. No es secreto que un porcentaje representativo de las normas estatales son impotentes para enfrentarse a las acciones globales, lo cual supone un «ataque frontal al Estado de derecho (Campuzano, 2008). Lo anterior ha obedecido a que la globalización se ha constituido en la muestra más importante de un proceso que no sólo exporta y globaliza el derecho, sino que también produce alteraciones relevantes al imperio de la ley, lo cual transmuta la propia dinámica de la normatividad jurídica, alterando drásticamente su configuración y remodelando el marco institucional y legal en orden a la consecución de modelos jurídicos flexibles y fácilmente adaptables a la versatilidad de una producción desterritorializada (Campuzano, 2010). Adicional a lo dispuesto anteriormente, es generalizada la conciencia, en los legislativos de los Estados andinos, de dos creencias que han actuado en detrimento de la calidad de la ley: la primera, el considerar que su labor será evaluada por la cantidad de proyectos de ley y de las leyes que efectivamente sean sancionados y la segunda, el pensar que solamente con las leyes se solucionan los problemas jurídicos de los países. *“La primera consideración ha llevado a una producción excesiva de leyes que han generado gran cantidad de reglamentaciones, propiciando inestabilidad jurídica, imposibilidad de conocer la ley, así esta se reputa conocida, leyes producidas en su gran mayoría generales y ambiguas que contienen lagunas insanables gracias en gran parte a la ausencia de armonización y de falta de sistematización en su elaboración”* (Echeverri, 2009, p.11). Lo anterior produce un deterioro de la competitividad internacional de los países porque los buenos inversionistas prefieren retirarse a mercados más estables jurídicamente hablando. La segunda consideración, ha previsto que toda solución a los problemas que enfrentan los países andinos requiere de una ley, lo cual evita *“que se revise de fondo el problema y que se generen soluciones creativas diferentes a la imposición de normatividades internas”* (Blanco, 2010, pp. 35 -36)

Las disposiciones que van insertas dentro de un sistema normativo, deben asegurar la calidad de las normas, la coherencia global del respectivo sistema, así como su efectividad. Por ello, la técnica legislativa no sólo debe procurar establecer reglas formales sobre la redacción de las disposiciones, sino también sobre el contenido de los preceptos desde el punto de vista de la garantía de la unidad del ordenamiento -así, la técnica legislativa debe dar reglas y formular criterios para garantizar, por

ejemplo, la integración coherente de los distintos ordenamientos, de las diversas fuentes del derecho, su continuidad temporal, etc.- y, además, sobre la viabilidad y la eficacia real de las normas, así como sobre los procedimientos utilizados en su elaboración (Viver, 1996). Es desde la citada perspectiva en la que cobra importancia la propuesta del Ordenamiento Jurídico Andino de adelantar armonizaciones legislativas.

Es por todo lo anterior que resulta procedente proponer a los Estados andinos la existencia de una mejor normatividad con una mayor calidad; lo que supone propuestas de armonización legislativa presentadas por la Comunidad Andina a los Estados miembros. Dicha tarea requiere que el organismo de la CAN que las elabore garantice efectivamente la representatividad de todos los grupos sociales de los países andinos. Es bajo este contexto en el que adquiere importancia el Parlamento Andino, *“quien es el Órgano competente de formular propuestas de armonización legislativa a los países andinos con legitimidad”* (Blanco, 2010, p. 36)

MARCO TEÓRICO

Los fundamentos por los cuales a la fecha no existe una propuesta de armonización legislativa en temas propios de la contratación estatal, pueden enmarcarse en las siguientes tesis:

1.- Los Obstáculos Políticos al Proceso Andino de Integración: El desarrollo del proceso andino de integración se ha visto influenciado por aspectos de orden político que no han permitido su avance. A continuación se relacionaran algunos de estos aspectos:

➤ **La orientación estatalita del proceso de integración andino.** El modelo del proceso andino de integración evidencia una fuerte tendencia estatalita que lo aleja del tradicional modelo de integración y amenaza la consecución de sus objetivos. (Alcoceba, 2008). Lo anterior en razón a que *“la institucionalidad andina responde a un énfasis cada vez más intergubernamental y menos comunitario”* (Parlamento Andino, p. 31, 2007).

➤ **El desarrollo del proceso andino de integración ha sido mediante políticas de gobierno y no mediante políticas de Estado:** La integración andina ha sido liderada mediante políticas de Gobierno, lo que ha generado que ésta se constituya como un proceso burocrático, supeditado a los gobiernos centrales de cada país, quienes tienen una voluntad variable frente a la integración. Es por lo anterior que en relación con los objetivos y plazos establecidos en el Acuerdo de Cartagena y en el protocolo de Trujillo, el nivel de incumplimiento de los países miembros es muy alto.

➤ **Desinstitucionalización del proceso andino de integración:** La mera pertenencia al Sistema Institucional Andino (SAI) impone la obligación de actuar de acuerdo al objetivo único de la consecución de los objetivos del Acuerdo de Cartagena. Ello quiere decir que el conjunto del Sistema Institucional Andino (SAI) debe integrar una unidad de acción coherente que respete y de cumplimiento al Acuerdo de Cartagena y, por extensión, al Derecho Andino. Por tanto, todos y cada uno de los órganos e instituciones andinas deben ajustar su funcionamiento a pautas de conducta que tiendan de forma unitaria a la consecución de los objetivos comunitarios. Lo anterior no es más que el *“principio de unidad, el cual impone y permite garantizar un funcionamiento institucional coherente y centrífugo, en el que la actuación de los distintos órganos se oriente en una misma dirección, evitando la dispersión institucional”* (Quindimil, 2006, pp. 145 y 146).

Al respecto, el Sistema Andino de Integración (SAI) no evidencia la efectividad del referenciado principio de unidad por la desarticulación, ineficacia y no coordinación de los órganos e instituciones

que lo conforman. Lo dispuesto anteriormente, se evidencia en los aspectos que a continuación se proceden a relacionar: i) No acatamiento de los fallos de los órganos del Sistema Andino de Integración (SAI), por la prioridad asignada a las consideraciones locales o internas de los países sobre los intereses comunitarios; ii) Por el énfasis dado en la estructura institucional de la Comunidad Andina las actividades adelantadas por entes ejecutivos como los Ministerios de Relaciones Exteriores, la Comisión y la Secretaría General de la Comunidad Andina; iii) Por la inexistencia de políticas de coordinación de los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI) en el marco del Derecho Andino de la Integración.

➤ **Déficit Democrático:** En el ámbito andino encontramos regímenes presidenciales, con fuertes poderes del Ejecutivo, que permite que dichos poderes jueguen un rol determinante en el proceso de integración andina, lo cual da lugar a que los Ejecutivos de los Estados Andinos concentren la gestión del proceso de integración andino, fundamentándose en la competencia de manejar las relaciones internacionales. Es en el referenciado contexto en el que opera el Déficit Democrático, el cual es entendido como *“la incapacidad del proceso andino de integración para integrar a la sociedad civil”* (Prieto, 2008, p. 38), lo cual da lugar *“al debilitamiento de la democracia representativa, en pro del fortalecimiento de un poder ejecutivo supranacional”* (Parlamento Andino, 2007, p. 52).

El déficit democrático en el proceso andino de integración, se refleja en la inexistencia de espacios deliberativos democráticos, lo cual genera la no participación activa de los organismos del Sistema Andino de Integración en el proceso y mucho menos del pueblo andino. Otra de las manifestaciones del Déficit Democrático que padece el proceso andino de integración radica en la concentración de poder en los órganos intergubernamentales del Sistema Andino de Integración (Consejo Presidencial Andino y Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores) y en la reducción de funciones y autonomía de los órganos de carácter comunitario (Parlamento Andino y Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), muestra de ello, es que el Parlamento Andino, en la práctica, a pesar de ser el órgano encargado de generar el involucramiento de la sociedad civil a la integración andina, en la práctica, tiene una función básicamente declarativa y deliberativa sin ningún poder decisorio y de carácter realmente vinculante, a pesar de que normativamente está tipificado como un órgano comunitario, y como consecuencia de ello, con capacidad, en principio, para emitir decisiones comunitarias, con carácter vinculante en la subregión.

➤ **La escasa voluntad política de los Estados que conforman la Comunidad Andina (CAN) de promover y fortalecer el proceso andino de integración:** En el modelo de integración andino aún no se verifica la voluntad política de sus estados fundadores de transferir plenamente el ejercicio de competencias soberanas a la Comunidad para conseguir objetivos e ideales compartidos. Para el efecto, es importante anotar que *“La vía hacia la integración andina suele ser un discurso con pocas acciones directas por parte de los Estados miembros, para lograr su materialización. Lo anterior obedece a que los problemas sociales y políticos, de carácter interno, han ocupado la atención prioritaria de los Estados andinos; desplazándose a un segundo plano los temas correspondientes a la integración”* (González, 2001, p.5). Dicha circunstancia ha generado la reducción, de los compromisos andinos, a simples acuerdos diplomáticos.

➤ **La crisis democrática representativa en los países andinos:** La generalizada insatisfacción con la representación democrática es un elemento central de la crisis de la democracia en los países andinos. De hecho, existen autores que se han atrevido a afirmar que *“las deficiencias percibidas de la representación democrática son más pronunciadas en los países andinos que en casi todo el resto de América Latina”* (Mainwaring & Bejarano, 2008, p.31). Es evidente el desgaste del sistema

democrático representativo de los países andinos, circunstancia que afecta el desarrollo del proceso de integración andino, como quiera que éste, en la actualidad, es direccionado, precisamente, por los órganos ejecutivos de los países miembros, quienes son elegidos por representación popular, con constantes críticas respecto de su gestión (Pacheco, 2000).

➤ **Ausencia de Legitimidad en la Integración Andina:** El poder, y más específicamente el poder político, requiere siempre de algún modo de argumentación o de reconocimiento que lo legitime o lo justifique, ante sí mismo y ante aquellos sobre los que se ejerce; todo ello con el fin y pretensión última de asegurarse, por la persuasión o la amenaza de la fuerza o de la coacción, la obediencia y el acatamiento (Gil, 2002). Bajo el citado contexto, si se quisiera una aproximación al concepto de la legitimidad, se podría afirmar que es el poder dominante reconocido, es decir, admitido, aceptado y justificado, lo que permite que los dominados sean reconocidos por la dominación misma (Moreno & Ramírez, 2006). En este orden de ideas, la creencia de los ciudadanos y de los individuos, es el primer paso para reconocer la legitimidad del poder y de esta manera, el mantenimiento o estabilidad del mismo (Marcos, 2004).

El proceso andino de integración evidencia deslegitimización frente al pueblo andino, como quiera que el mismo no siente que dicho proceso contribuya con soluciones a sus problemas socio-económicos. *“Desde el surgimiento del Pacto Andino, hoy Comunidad Andina, se ha identificado una ausencia de participación de la sociedad civil”* (Sánchez, 2007, p. 44), lo cual ha generado que la legitimidad del proceso de integración andina esté en crisis.

El ciudadano andino, en general, no tiene conocimiento sobre la razón de ser de la Comunidad Andina (CAN), y en especial de su papel en los marcos internacional e interno de los países miembros. En un estudio adelantado por el Parlamento Andino sobre la reforma institucional de la Comunidad Andina, se señala que la escasa participación de la sociedad civil en el proceso andino tiene que ver con el tipo de participación implementada en la Comunidad Andina, el cual enfatiza en “las formas y las normas”, pero no en un verdadero proceso de participación ciudadana. *“Lo anterior ha generado que sus políticas se basen en meras declaraciones programáticas, generando respuestas tardías y claramente insuficientes a los problemas socio económicos de los ciudadanos andinos”* (Parlamento Andino, 2007, p. 58). Adicional a lo dispuesto anteriormente, es pertinente anotar que a pesar de los evidentes avances, el proceso de integración andino no ha sido capaz de integrar a importantes sectores de la población gracias a políticas prioritariamente económicas y comerciales que no hacen visible la realidad tan compleja de los países andinos (Pacheco, 2000).

2.- Los Obstáculos Jurídicos al Derecho Andino de la Integración: El desarrollo del proceso andino de integración se ha visto influenciado por aspectos de orden jurídico que no han permitido su avance. A continuación se relacionaran algunos de estos aspectos:

➤ **Ausencia de Disposiciones Constitucionales que Reconozcan la Supremacía del Ordenamiento Jurídico Andino Derivado:** Al verificar el contenido de las Constituciones andinas, se puede constatar que las mismas no establecen clara y expresamente la eficacia plena del ordenamiento jurídico andino derivado. Si bien la Corte Constitucional colombiana ha manifestado el carácter prevalente y de supremacía del Derecho Comunitario Derivado, ello no es suficiente para lograr una verdadera supremacía y prevalencia de dicho Ordenamiento Jurídico. De hecho, parte de la Doctrina, ha considerado la necesidad de reformas constitucionales, previendo la supremacía del derecho de la integración derivado, sobre el derecho interno (Tremolada, 2006). Ahora bien, es pertinente anotar que la ausencia de disposiciones constitucionales que reconozcan la supremacía del ordenamiento jurídico andino derivado obedece, entre otros aspectos, a que en la jerarquía normativa

para las normas internacionales no existen normas supraconstitucionales; es por ello que resulta procedente afirmar que el Derecho Comunitario Andino no se acomoda a los supuestos normados por el artículo 93 de la Constitución de acuerdo con la doctrina sentada por la Corte Constitucional en Sentencia C-256 de 1998.

➤ **Omisión en el proceso de transformación de norma internacional a norma comunitaria del Derecho Comunitario Originario:** El Derecho Constitucional de cada uno de los países miembros de la Comunidad Andina (CAN), ha asumido como presupuesto para la vigencia del Derecho Internacional, que los Tratados que suscriban deberán ser recepcionados por ley para que produzcan los efectos deseados. Lo anterior también resulta aplicable a los Tratados, Acuerdos y Protocolos que conforman el Ordenamiento Jurídico Andino, lo cual en principio, no facilita el cabal cumplimiento de las metas de la Organización Andina (Insignares, 2007). Para el efecto, los Tratados Constitutivos de todo proceso de integración requieren un proceso de transformación, en el que las normas contenidas en dichos Tratados no se rija por normas y principios internacionales, sino por principios propios e independientes que permitan el desarrollo adecuado de las finalidades propuestas por los Estados Miembros (Diez-Hochleitner, 1998).

Es en el citado contexto en el que se plantea la necesidad de aumentar las atribuciones del Congreso Nacional en la materia: « democratizar la acción exterior del Estado no implica la sustitución del Presidente de la República en su papel central en este campo, por la del Congreso Nacional, sino buscar un mayor equilibrio, un necesario contrapeso entre ambos poderes, como asimismo un reforzamiento al control preventivo del Tribunal Constitucional» (Visión, 2003).

En este orden de ideas, los tratados internacionales que crean los compromisos y las instituciones que garantizan las finalidades propias del proceso de integración andino, jurídicamente no tienen una trascendencia mayor que los tratados internacionales en otros campos, por tanto se debe negar que la fuerza vinculante de aquellos tratados sea mayor. Lo anterior no acontece en la Unión Europea, pues para la jurisprudencia y la doctrina europea, el hecho de que los tratados que versen sobre el desarrollo de espacios regionales integrados, implican una verdadera transformación de esas normas (Diez - Hochleitner, 1998), pues ya no hacen parte de una estructura normativa guiada por los principios de buena fe y pacta sum Servanda, sino que empiezan a ser normas con una fuerza coercitiva real respaldada en instituciones legítimamente constituidas, lo que lleva a concluir que, los tratados internacionales no deben estudiarse bajo un enfoque de Derecho Internacional, sino bajo una perspectiva comunitaria, que es la acepción propia para este estudio (Palomares, 2008).

En concordancia con lo dispuesto anteriormente, resulta procedente iniciar el debate del espinudo tema de la jerarquía normativa de los tratados internacionales en nuestro ordenamiento jurídico. Muy seguramente resultará improbable, que se genere consenso constitucional en torno a definir, en la Carta Fundamental, la jerarquía normativa de los tratados internacionales, en razón a lo dispuesto por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, plenamente vigente en Colombia, la cual dispone en sus artículos 25 que «todo tratado obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe»; y el artículo 27° inciso 1°, el cual señala que «una parte no podrá invocar las disposiciones de su Derecho Interno como justificación del incumplimiento de un tratado» (Visión, 2003). Sin embargo el citado razonamiento resulta deficiente, no resuelve problemas jurídicos propios de la contradicción que puede evidenciar el derecho comunitario andino originario con la constitución o con normas que ostenten del mismo nivel de importancia a la Carta Política; como por ejemplo qué ocurre cuando un tratado internacional, propio del ordenamiento jurídico andino, vulnera una ley orgánica?

➤ **Ausencia de un fundamento constitucional claro que determine como es el traslado del ejercicio de competencias a la Comunidad Andina:** La lectura del articulado de las Constituciones andinas no permite concluir de forma expresa que los países miembros mediante una cláusula general de competencia permitan la cesión del ejercicio de competencias soberanas. Para que el Estado pueda ceder parte del ejercicio de su soberanía es necesario un soporte constitucional para que se configure la soberanía comunitaria (Palomares, 2006). De hecho, inclusive, parte de la doctrina ha establecido que para el caso colombiano, el cual en nuestro criterio es el que más avance ha representado en el tema con relación a los demás países miembros, con la negociación y firma de los Tratados Internacionales, es viable una delegación de competencias. Sánchez (2000) y Pérez (2000) han llegado a concluir que las disposiciones constitucionales colombianas son un claro ejemplo de la legitimación constitucional para que el Estado, bajo una actuación soberana, delegue competencias a órganos supranacionales regionales.

Al analizar la normatividad constitucional de los países miembros, en lo relacionado al ejercicio de las competencias que los Estados andinos han supuestamente transferido a la Comunidad Andina (CAN), se puede constatar que las mismas se constituyen en normas abiertas, y a veces ambiguas, como quiera que las mismas no determinan específicamente qué temas y subtemas puntuales son los que pueden ser gestionados por la Comunidad Andina (CAN) y los criterios fácticos y en tiempo, para el desarrollo de las mismas.

➤ **Cumplimiento Relativo de las Decisiones y Resoluciones de la Comunidad Andina en la jurisprudencia de las Altas Cortes.** Al verificar el contenido de varias de las Decisiones y Resoluciones se pudo corroborar que dicho contenido no amerita aplicación directa, inmediata y con prevalencia, en los procesos contenciosos y ordinarios que deben liderar las Altas Cortes de los países miembros. Lo anterior obedece en primer lugar a que el mencionado contenido se circunscribe a directrices de carácter general y programático, que no permite configurarse como herramienta jurídica aplicable por los Magistrados de las Altas Cortes; y en segundo lugar, a que el contenido de varias de las Decisiones emitidas está ya previsto en leyes emitidas por los Legislativos de los países miembros, lo que genera como consecuencia que las Altas Cortes prefieran aplicar dichas leyes, respecto de las referenciadas Decisiones, en aras de garantizar el principio de legalidad.

➤ **No Incorporación del Ordenamiento Jurídico Andino al Bloque de Constitucionalidad:** Al analizar las normas que conforman el Bloque de Constitucionalidad, se puede constatar que los Tratados, Protocolos y Acuerdos que conforman el Derecho Comunitario Primario no forman parte del citado bloque, entendiendo a este último como aquella figura que permite entender *“que la Constitución política no se agota en su articulado, sino que implica la integración con otras normas”* (Quinche, 2010, p.84).

Al respecto, es pertinente anotar que si bien la tendencia de la Corte Constitucional es considerar que el ordenamiento jurídico andino no hace parte del bloque de constitucionalidad, ha habido salvamentos de voto respecto al particular. En Sentencia C-1490 de 2000 con ponencia del Magistrado Fabio Morón Díaz, se estableció la necesidad de que los tratados internacionales incorporados en el ordenamiento nacional pueden ser incluidos en el bloque de constitucionalidad, ya que éste no solamente puede estar conformado por tratados que versen sobre derechos humanos o sobre la prohibición de limitarlos en los estados de excepción.

El hecho de que el ordenamiento jurídico andino no forme parte del bloque de constitucionalidad permite que éste pueda ser objeto de la potestad reglamentaria y de precisión por parte de leyes, al no ser dichas normas internacionales parte de la Carta Fundamental.

✓ **Consecución de los objetivos general y específicos planteados**

La investigación se adelantó desde la perspectiva política – jurídica, descartando el enfoque económico, en primer lugar porque si bien el núcleo esencial del proceso de integración andino es de carácter económico, se considera que antes de debatir sobre la integración económica de los países miembros, es necesario analizar si los Estados andinos están preparados política y jurídicamente para asumir los beneficios y riesgos de dicha integración y en segundo lugar porque la doctrina ha hecho notar que la necesidad de la integración si bien ha sido en primer lugar de carácter económico, consecuentemente también es jurídica y política. Es en este sentido que se propone desde el enfoque político y jurídico dar respuesta al problema jurídico formulado.

El enfoque de la investigación fue de carácter jurídico, en razón a que el objeto de la misma fue el conocimiento de la norma jurídica comunitaria andina y de la norma jurídica interna en el tema del problema jurídico referenciado y de esta manera, estudiar los problemas que suscita la aplicación de la norma comunitaria, sus contradicciones, deficiencias y omisiones. Es pertinente anotar que la investigación evidencio un enfoque Ius Político, en razón a que se analizó la legitimidad de las normas jurídicas proferidas por la Comunidad Andina, la razón de su establecimiento y de sus propósitos políticos.

En el marco de una investigación de carácter cualitativo, el tipo de investigación fue de carácter exploratorio en razón a que su objetivo es examinar un problema de investigación poco estudiado. A la vez fue investigación descriptiva en razón a que pretendió especificar las principales propiedades de los sujetos que intervienen en el proceso andino de integración. Adicionalmente, la investigación fue explicativa porque está dirigida a responder las causas por las cuales el Derecho Andino de la Integración no produce los efectos deseados en el marco de la contratación estatal

Se utilizaron como fuentes primarias el derecho originario comunitario, las Decisiones y Resoluciones de la Comunidad Andina; las noticias diarias que reporta el Diario de la Comunidad Andina; las actas de los órganos con capacidad normativa de la Comunidad Andina, la Jurisprudencia de las altas Cortes colombianas, la ley nacional y la Carta Política. Como fuentes secundarias se analizará la Doctrina elaborada sobre el tema en particular; estadísticas y estudios de expertos de la Comunidad Andina.

✓ **Resultados.**

La investigación evidencio la importancia de establecer la importancia de propuestas de armonización legislativa en la Comunidad Andina (CAN) en temas propios de la contratación estatal.

Lo anterior en razón a que se identificó la crisis del proceso andino de integración, el papel del Derecho Andino de la Integración en la contratación estatal y la importancia del Parlamento Andino en el marco de propuestas de armonización legislativa en la temática propia de la contratación estatal

✓ **Conclusiones.**

Es en el marco de la globalización en donde juega importancia los procesos de integración, los cuales permiten la construcción de realidades sociopolíticas en los países miembros (Vélez, 2007) que se deberían materializar a través de la formulación de proyectos de armonización legislativa.

En el marco de la Comunidad Andina se ha debatido reiteradamente sobre la razón de ser de la integración; y en este sentido, ésta se ha considerado como un medio para el desarrollo de los países comprometidos en ella; motivo por el cual se ha comprendido que la integración andina no solo debe analizarse desde el punto de vista económico ya que la proclama del Acuerdo de Cartagena asume la premisa de que la integración es una empresa con múltiples objetivos, entre los cuales el desarrollo económico es solo una de las metas que se pretenden alcanzar (González, 2009). En otras palabras, la integración andina no solo es de carácter económica, sino también jurídica, y es bajo esta premisa que resulta pertinente el problema jurídico planteado.

El Parlamento Andino es el verdadero escenario de debate de los problemas de orden político, económico, social y jurídico que evidencie la Comunidad Andina y como consecuencia de ello, es el Órgano con legitimidad para aproximarse a soluciones de los mismos. Es por lo anterior, que el citado Órgano internacional se configura como el espacio obligado para el debate democrático en el contexto de la supranacionalidad, lo cual implica que ésta es la instancia para el encuentro de los intereses nacionales y subregionales, en el marco de la discusión democrática andina.

De conformidad con el artículo 43 del Acuerdo de Cartagena, es competencia del Parlamento Andino formular propuestas de armonización legislativa al interior de los Estados que conforman a la Comunidad Andina. A pesar de la claridad de la citada función, hasta la fecha no existe el primer proyecto de armonización legislativa presentado por el citado Organismo Internacional, desconociéndose de esta manera el Acuerdo de Cartagena, el Protocolo de Trujillo y el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino.

La meticulosa y amplia protección de la industria y el trabajo nacionales se encuentra plenamente justificada dentro del marco proteccionista que oriento la actividad económica por varios lustros; sin embargo la globalización, necesariamente tiene que afectar el esquema tradicional. Es en el citado contexto en donde se justifica la propuesta de analizar los fundamentos por los cuales a la fecha no se ha logrado armonizar legislativamente temas propios de la contratación estatal.

La armonización legislativa, en los temas que resulten procedentes de la contratación estatal, beneficia a los Estados andinos, ya que permite, entre otros aspectos, la efectividad del principio de reciprocidad contractual, ya que permite lograr univocidad de criterios en los procesos de selección de contratos estatales al interior de los Estados que conforman la Comunidad Andina y como consecuencia de ello, la posibilidad de ampliar las fronteras en la participación en procesos de selección de contratos estatales de personas naturales y jurídicas extranjeras nacionalizadas o domiciliadas en alguno de los países de la CAN. Adicionalmente, la armonización legislativa permitiría evitar el alto grado de discrecionalidad en la estructuración y desarrollo de los procesos de selección de ofertas al Estado, de ejecución de contratos estatales y de liquidación de los mismos y a la vez, permite usufructuar las bondades normativas positivizadas en algunos Estados miembros, que pueden ser aprovechadas por otros países andinos que no las tienen.

Desde la firma del tratado de creación de lo que en un momento se denominó Pacto Andino y ahora conocemos como Comunidad Andina, no ha terminado de hacerse clara en la mente de la población la idea del proceso de integración, ni de cuáles son al fin de cuentas, sus beneficios. Es por lo anterior que con esta investigación se pretende, entre otros objetivos, aproximarse a algunos beneficios que el

proceso andino de integración puede ofrecer a los Estados andinos desde la perspectiva de la contratación estatal.

El problema jurídico planteado permitió dos (2) hipótesis que a continuación se proceden a referenciar:

➤ **La crisis política y jurídica que ha evidenciado el proceso andino de integración:** Sin lugar a equívocos el proceso andino de integración ha evidenciado una crisis. Las causas de dicha circunstancia, en esencia, no son de carácter económico, sino que las mismas se circunscriben a aspectos de orden político y jurídico que no permiten avanzar en la integración andina y que se ubican de forma antecedente al proceso de integración económica. Gran parte de la Doctrina, cuando analiza el fenómeno de la integración andina lo hace desde la perspectiva económica y en este sentido, enmarcan su crisis desde la referenciada perspectiva. Al respecto, se considera que antes de debatir sobre la integración económica en la Comunidad Andina (CAN), es necesario analizar si los Estados andinos están preparados política y jurídicamente, para asumir los beneficios de una integración económica. Lo anterior como quiera que en cualquier proceso de integración es necesario que los Estados miembros, estén preparados política y jurídicamente para asumir los beneficios y retos de la integración económica. Por regla general, se ha considerado que el motivo de la crisis de un proceso de integración obedece al debilitamiento de la corriente de intercambio comercial, ello suele ser el fundamento indicador de que los esquemas de integración están en crisis. Este argumento es objetable, porque la reducción del comercio intrarregional no es causa sino efecto de la crisis. En este sentido, ¿cuando en realidad existe crisis en un proceso de integración? Para efectos de dar respuesta a la referenciada pregunta, podría afirmarse, que la referenciada crisis *“se evidencia cuando los objetivos del proceso de integración no pueden ser alcanzados, a menos que el esquema sea reformulado sustancialmente”* (Guerra, 1997). En cualquiera de estas circunstancias (y pudiera haber otras) se está en presencia de lo que podríamos llamar crisis orgánica de los procesos, pues su origen está en la esencia misma de estos, en su concepción y conformación, y no en situaciones o factores económicos.

Es por lo anterior que se considera que el fundamento de la crisis del proceso andino de integración, no es estrictamente de carácter económico, sino que la referenciada crisis obedece a factores de orden político y jurídico, ubicados en un nivel anterior a la integración económica propiamente dicha y que en última instancia se circunscriben, a la falta de preparación de los países miembros para comportarse en un ambiente de integración andina.

➤ **Los obstáculos al Derecho Andino de la Integración:** Al contextualizar el Ordenamiento Jurídico Andino, se infiere que el Derecho Internacional y el Derecho Nacional *“comenzaron a disolverse y a confundirse en todas aquellas materias que comenzaban a ser reguladas por el Derecho de la Integración”* (Quindimil, 2006, p. 317). Lo anterior da lugar a que el Derecho comience a convertirse en un fenómeno esencialmente tridimensional, en la medida en que entre las dimensiones nacional e internacional se intercala la dimensión comunitaria (Quindimil, 2006). Es por lo anterior, que resulta procedente afirmar que la aparición del Derecho Andino de la Integración en la esfera internacional reordena las relaciones entre los sistemas normativos internacional y estatal, generando alteraciones en la escala jerárquica normativa preexistente y como consecuencia de ello, vicisitudes en la aplicación de las decisiones comunitarias.

Para el efecto, es pertinente anotar que el Derecho Comunitario se origina y nutre del Derecho Internacional, pero, en virtud de su supranacionalidad, se constituye en un ordenamiento jurídico propio y especializado distinto del Derecho Interno y del Derecho Internacional, que se inserta en los

ordenamientos jurídicos nacionales con valor superior a la ley nacional, a la cual desplaza o sustituye en forma directa y automática (principios de primacía y preeminencia), y sin necesidad de complemento normativo de Derecho interno. Es en este sentido, en el que Derecho Comunitario y el Derecho Interno coexisten en un mismo territorio, suelen recaer sobre los mismos destinatarios y regulan las materias que los respectivos ordenamientos jurídicos se han reservado; lo que evidencia una yuxtaposición normativa que debe ser coordinada y que en la realidad no se evidencia.

✓ **Referencias.**

Alcoceba M. (2008). La Reorientación Estatalista del Proceso de Integración Europea, *Revista de Derecho de la División de Ciencias Jurídicas - Núm. 29, Junio 2008*. Documento Extraído el 6 de diciembre de 2010 de <http://vlex.com/vid/51364983>

Blanco Alvarado Carolina. (2010 a). La Importancia Política y Social del Parlamento Andino. *Revista Via Inveniendi Et Iudicandi. Universidad Santo Tomas, 10ª Edición*. Documento extraído el 30 de Octubre de 2010 de <http://viei.usta.edu.co>

Blanco Alvarado Carolina. (2011). Aproximación a la Perspectiva Jurídica de las Decisiones del Parlamento Andino en los Ordenamientos Jurídicos de los Estados Andinos en *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Vol 6 No. 2, Julio – Diciembre de 2011*, Universidad Militar Nueva Granada

Blanco C. (2012). Los Principales Obstáculos al Proceso Andino de Integración en *Revista Virtual - Universidad Católica del Norte, Barranquilla, Edición No. 35 – Febrero de 2012*.

Caballero S & Anzola G. (1995). *Teoría Constitucional*. Bogotá, Colombia.: Temis.

Campuzano A. (2008). Dimensiones jurídicas de la globalización, Madrid, Dykinson, 2007 en *Anuario de Filosofía del Derecho - Núm. XXV, Enero 2008*. Documento extraído el 22 de diciembre de 2012 de <http://vlex.com/vid/68145603>

Campuzano A. (2010). *El pluralismo jurídico y la ciencia del derecho*. Documento extraído el 3 de octubre de <http://vlex.com/vid/217474465>

Carrillo J. (1985). *El Derecho Internacional en un mundo en cambio*. Madrid, España.: Ed. Tecnos.

Castells M. (1998). *La Era de la Información Economía, Sociedad y Cultura Vol. 2 El poder de la identidad*. Madrid. España.: Alianza

Cauffignal G. (1996). *Los Procesos de Integración de América Latina, Enfoques y Perspectivas*. Estocolmo.: Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo.

Díaz C & Romero M. (2008). *Elementos de Análisis para la Integración de un Espacio Iberoamericano*. Madrid, España.: Plaza Valdés Editores.

Díez J. (1998). *La Posición del Derecho Internacional en el Ordenamiento Comunitario*, Madrid, España. Edit: Mc Graw Hill.

Dreyzin A. (2007). *La Integración como Instrumento para la Paz y el Desarrollo: El modelo Mercosur en Integración Regional: Una Condición para la Paz y el Desarrollo*. Bogotá, Colombia.: Universidad Externado de Colombia.

Echeverri D. (2009). Elementos Básicos para mejorar la calidad de la normatividad andina dentro de la nueva visión estratégica de la CAN, *Revista: Rescate del pensamiento Latinoamericano*, Edición VI, *Parlamento Andino*. Bogotá, Colombia.

Estrada L. (2006). La Lenta Agonía de la Descentralización. *Revista Ratio Juris* - Núm. 4, Diciembre 2006

Gil A. (2002). *El Poder y su Legitimidad*. Editorial Marfil S.A. Valencia, España.

Gonzales C. (2009). Agenda Social Andina: ¿Una realidad?, *Revista: Rescate del pensamiento Latinoamericano*, Edición VI, Editada por el Parlamento Andino. Bogotá, Colombia.

González R. (2001). *Integración en América Latina y el Caribe, Análisis sobre Procesos de Regionalización*. Cartagena, Colombia.: Ediciones Uninorte.

Guerra A (1997). *La Integración de América Latina y del Caribe: La Practica de la Teoría*. Ciudad de Mexico, Mexico. Edit: Instituto de Investigaciones Económicas Universidad Nacional Autónoma de México.

Guerra A. (2002). *Globalización e Integración Latinoamericana*. Ciudad de México, México.: Universidad Rafael Landívar INAM. Siglo XXI Editores SA.

Insignares Cera Silvana. (2007). El Derecho Comunitario Andino ¿Obstáculo en la Integración?. *Revista de Derecho de la División de Ciencias Jurídicas* – Num 27, Julio 2007. Documento Extraído el 3 de diciembre de 2010 de <http://vlex.com/vid/51570070>

Quindimil J. (2006). *Instituciones y Derecho de la Comunidad Andina*. Bogotá, Colombia.: Tirant lo Blanch. Bogotá, Colombia.

Mainwaring S & Bejarano A. (2008). *La Crisis de la Representación Democrática en los Países Andinos*. Bogotá, Colombia.: Grupo Editorial Norma.

Marcos A. (2004). *Manual de Teoría del Derecho*. Documento Extraído el 19 de octubre de 2010 de <http://vlex.com/vid/269137>

Moreno Duran Álvaro & Ramírez José Ernesto. (2006). *Pierre Bourdieu, Introducción Elemental*. Edit: por los Autores. Bogotá, Colombia (pp. 21 y 22)

Núñez M. (2009). *La crisis del Estado en Estado, Derecho y Religión en Oriente y Occidente*. Documento Extraído el 29 de diciembre de 2012 <http://vlex.com/vid/65576105>

Pacheco M. (2010). *Los Órganos de la Comunidad Andina y su papel en el Logro Efectivo de la Participación Civil en el proceso de Integración*. Documento Extraído el 11 de noviembre de 2011 de <http://www.can.gov.co>

Palomares J. (2006). *El concepto de Soberanía en el proceso de Integración Europeo*, recuperado el 15/02/11 de http://www.redsociojuridica.org/integracion_europea.htm.

Palomares J. (2008). Comunidad andina: ¿es vinculante el derecho comunitario?. *Revista Via Inveniendi et Iudicandi* - Núm. 5, Mayo 2008. Documento Extraído el 10 de noviembre de 2011 de <http://vlex.com/vid/42489356>

Parlamento Andino. (2007). *Estudio Sobre Reforma Institucional en la Comunidad Andina*. Bogotá, Colombia.: Secretaria General del Parlamento Andino

Perotti J. (2010). La Acción Internacional de las Provincias y Municipios Argentinos. *Memorias: V Congreso de Relaciones Internacionales*, 24, 25, 26 de noviembre de 2010, Universidad Nacional de la Plata, La Plata, Argentina.

Quinche M. (2010). *Derecho Constitucional Colombiano*. Bogotá, Colombia.: Doctrina y Ley

Sánchez D (2007). La Democracia en la Comunidad Andina. *Revista Indoamerica. Revista de la Integración Andina*. Año 2 No. 6. Edit: Jorge Arias Montoya y Linder Vasquez Linares. Lima, Perú.

Sánchez V. (2000). *La integración y la Constitución Política de Bolivia*, recuperado el 20/03/07 de <http://www.comunidadandina.org/bda/docs/BO-INT-0003.pdf>.

Secretaria General de la Comunidad Andina. (2006). *La Comunidad Andina. Una Apuesta por Nuestro Futuro*. Edit: CAN. Lima, Perú

Sobrino J. (1996). Las Bases Jurídicas del Derecho Comunitario Europeo, en *Memorias del Seminario Internacional Derecho Andino e Integración Económica en América*. Santiago de Cali, Colombia.: Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena/Instituto de Altos Estudios Jurídicos, Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle, Colombia.

Tremolada E. (2006). *El Derecho Andino en Colombia*. Bogotá, Colombia.: Universidad Externado de Colombia

Tremps P. (1994). *Constitución Española y Comunidad Europea*. Madrid, España.: Ariel.

Vélez, R. (2007). Déficit Democrático Vs Reorientación. *Simposio de la Cátedra Andina "Razón y Sinrazón de la integración latinoamericana"*, 5 de febrero de 2007, Quito – Ecuador.

Visión prospectiva en relación con la regulación constitucional de los tratados internacionales. (2003). *Revista Ius et Praxis* - Núm. 9-1, Enero 2003. Documento extraído el 30 de diciembre de 2012 de <http://vlex.com/vid/43444091>

Viver I. (1996). Técnica legislativa: estado de la cuestión y balance (provisional) de una década en *Revista catalana de derecho público* - Núm. 21, Diciembre 1996. Documento extraído el 22 de diciembre de 2012 de <http://vlex.com/vid/62877385>

Informe de producción investigativa

Tipo de productos derivados del desarrollo del proyecto según compromisos adquiridos: movilidades (Código ORII), publicaciones (ISBN, aceptación artículo o publicación), alianzas/redes establecidas (cartas de intención, convenios, etc.), otro tipo de productos (evidencia y medio de verificación). Si es producto no se encuentra terminado al momento de la entrega del informe, se debe relacionar una fecha tentativa de entrega.

Se debe diligenciar la siguiente tabla de relación de productos y relacionar los anexos correspondientes:

Tipo de producto (Artículo, ponencia, evento, libro, capítulo de libro, etc.)	Nombre de producto (Indique título del artículo, ponencia, evento, libro, capítulo de libro, etc.)	Fecha de revisión, publicación o presentación (Indique fechas de publicación, revisión o presentación en evento del producto. Si aún no se tiene el producto final, indique la fecha de entrega)	Nombre de la revista/libro o evento en que se presenta el producto. (Si el producto no se ha finalizado indicar el medio en el que se proyecta la publicación o divulgación)	Modo de verificación (ISSN, ISBN, página web, etc. Si el producto no se ha finalizado, escribir “no se ha finalizado” en esta columna.)	Número de anexo (Incluya en los anexos, de manera ordenada el soporte escaneado que demuestre la existencia del producto o el envío a revisión –asigne un número a cada anexo y relaciónelo en esta columna. Si el producto no se ha finalizado, escribir “no se ha finalizado” en esta columna)
Directora de Tesis	La capacidad Jurídica de los Consorcios y las Uniones Temporales en la Contratación Estatal	Abril de 2017		CvIac Grup Lac	
Directora de Tesis	La participación del garante en el procedimiento sancionatorio	Mayo de 2017		CvIac Grup Lac	
Artículo	La Comunidad Andina en el marco de lo jurídico y político	Revista No. 31. Enero/13 a Junio/13. ISSN 0121-182X	REVISTA PROLEGOMENOS	REVISTA PROLEGOMENOS Revista No. 31. Enero/13 a Junio/13. ISSN 0121-182X	REVISTA PROLEGOMENOS Revista No. 31. Enero/13 a Junio/13. ISSN 0121-182X
Artículo	La Crisis de la Comunidad Andina.	Revista No. 42. Julio/14 a Diciembre/14. ISSN 01218697.	REVISTA DE DERECHO	REVISTA DE DERECHO Revista No. 42. Julio/14 a Diciembre/14. ISSN 01218697.	REVISTA DE DERECHO Revista No. 42. Julio/14 a Diciembre/14. ISSN 01218697.
Capítulo de Libro	La responsabilidad del Estado colombiano frente al silencio y la ambigüedad de la Constitución en lo referente al contenido esencial del proceso andino de integración.	Reflexiones sobre la responsabilidad en el siglo XXI	Reflexiones sobre la responsabilidad en el siglo XXI	Reflexiones sobre la responsabilidad en el siglo XXI ISBN 978-958-8721-37-8. Año 2014	Reflexiones sobre la responsabilidad en el siglo XXI ISBN 978-958-8721-37-8. Año 2014
Capítulo de Libro	Los procesos de selección de operadores privados del servicio público de		Justicia constitucional tomo 2	ISBN 9789587497700 2017	Libro

	televisión entorno a la libre conurrencia				
Compiladora académica	Tendencias jurídicas del derecho publico	2016	Tendencias jurídicas del derecho publico	2016- ISBN978-958- 749-623-9	Libro

*Tenga en cuenta la tipología de productos de Colciencias.

Contenido del informe financiero

Por favor relacione los rubros que le fueron asignados

Horas nómina	Investigador	Número de horas asignadas	Escalafón
Otros rubros	Especifique el concepto	Describa el concepto	Valor del concepto ejecutado